



OPINIÓN

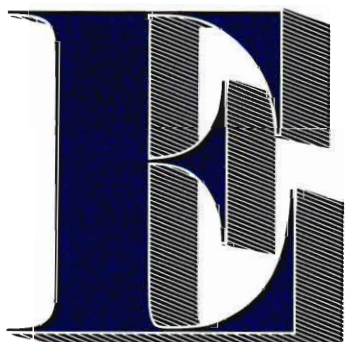
JOSÉ MIGUEL VILLARIG

Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA



# Renovables, el Gobierno español a contracorriente

MIENTRAS DELEGACIONES DE PAÍSES DE TODO EL MUNDO VIENEN A ESTUDIAR EL MODELO ESPAÑOL DE ENERGÍAS LIMPIAS, EL GOBIERNO SE DEDICA A DESTRUIRLO.



**E**l mundo quiere copiar el modelo de renovables que el Gobierno español está destruyendo. Delegaciones de numerosos países visitan España para conocer la fórmula que permitió a nuestro país convertirse en un referente. Lo cierto es que profundizando en el camino iniciado por el Gobierno anterior, el actual lleva a cabo una política que pone en peligro la existencia del sector español de renovables. Se estrenó con una moratoria y ha continuado legislando con el único y cortoplacista objetivo de acabar con el déficit de tarifa, sin profundizar en las causas que lo han generado ni prever el futuro del sector, poniendo en situación crítica a muchas de las instalaciones existentes al variar todos los parámetros en los que los promotores basaron la realización de sus proyectos.

Por improvisación y falta de seguridad jurídica, hemos pasado de ser modelo de lo que hay que hacer a modelo de lo que no hay que hacer. La inacabada reforma eléctrica del Ministerio de Industria está siendo mirada con preocupación por la Comisión Europea, que ha manifestado en repetidas ocasiones al Gobierno español la necesidad de garantizar que las reformas no ponen en peligro el futuro de las renovables y el objetivo 2020. A pesar de ello, son las grandes damnificadas de la reforma.

Las críticas a la reforma también llegan de las instituciones reguladoras españolas. Así, tanto la Comisión Nacional de Energía (CNE) como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) han sido duras en sus respectivos informes sobre la reforma al considerar que las renovables son tratadas de forma discriminatoria y que el Ejecutivo no aborda la transformación del irregular y falto de competencia mercado mayorista de la electricidad.

La política energética puesta en marcha por el ministro Soria pone en grave riesgo un sector industrial y económico que había conseguido un merecido liderazgo internacional. Paradójicamente lo hace cuando las energías renovables crecen en todo el mundo, con inversiones de 244.000 millones de dólares en 2012 y cuando cerca de 130 países cuentan con políticas de apoyo para el desarrollo de las energías limpias. La incoherencia es fruto, una vez más, de la improvisación con la que los diferentes Gobiernos vienen tratando los temas energéticos. La incongruencia llega al punto de que mientras el ministro Soria declara estar preocupado por la enorme vulnerabilidad y la enorme dependencia exterior del sistema energético español y que es objetivo del Gobierno reducir nuestra dependencia y nuestra factura energética, su Ministerio tramita una legislación que parece tener como objetivo acabar con la mayor fuente energética autóctona y limpia del país.

Todo esto, cuando la dependencia energética española, históricamente en un 80%, es de las mayores de Europa. Así, en 2012 la factura por importaciones energéticas en España fue de más de 46.608 millones de euros, de ellos 35.955 por petróleo y 10.653 por gas. En ese año, la electricidad generada por las renovables evitó la importación de unos 45 millones de barriles de petróleo, por valor de 5.000 millones de euros.

El lastre de la dependencia energética y la competitividad fue cuantificado por el anterior ministro de Energía, Miguel Sebastián: por cada 10 euros que sube el precio del barril de petróleo, España paga 6.000 millones de euros más al tener que importar prácticamente todo el crudo que consume.

APPA siempre ha mantenido que el problema más importante que tiene el sector energético español es la dependencia exterior aunque en este momento el más urgente sea el déficit de tarifa eléctrico. Las renovables entendemos que se puede atajar el déficit sin abandonar el sector de las energías limpias, rentables energética y económicamente. Un sector, que el año pasado generó más de 110.000 empleos y evitó la emisión de 38 millones de toneladas de CO<sub>2</sub>, y que en el periodo 2005-2011 abarató el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que las primas recibidas en dicho periodo.